



Proceso	Ejecutivo Hipotecario
Demandante	Luisa Fernanda Correa Marín
Demandado	José Ignacio Amaya Castañeda y María Eugenia Arbeláez Ríos
Radicado	05001 22 03 000 2023 00163 01
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 057
Decisión	Confirma infundada la causal 8ª de recusación prevista en el artículo 141 del C. General del Proceso.
Tema	<p>Compulsa de copias genera causal de recusación. Como lo señaló el <i>a quo</i>, tal proceder no es más que producto del cumplimiento del deber legal que tienen los funcionarios judiciales de denunciar los actos que consideren contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe, que deben observarse en el proceso (artículo 42 ib.). Pero la compulsas de copias es diferente a la denuncia disciplinaria o penal, que es el hecho que previó el legislador como casual de recusación.</p> <p>3. Debe rememorarse que si bien el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del abogado, señala que sólo podrán intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario, además de que el Ministerio Público puede hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales, el parágrafo del artículo 66 faculta al quejoso para concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva, de tal manera que, ante esas posibilidades y en garantía de la imparcialidad del juzgador, la causal de recusación se torna necesaria.</p>

2023 030

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, catorce (14) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Procede la Sala a pronunciarse sobre el auto del 23 de marzo pasado, proferido por el Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, dentro del proceso ejecutivo adelantado por Luisa Fernanda Correa Marín en contra de José Ignacio Amaya Castañeda y María Eugenia Arbeláez Ríos, mediante el cual se rechazó la recusación formulada por la apoderada de la parte demandada.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia del 26 de julio de 2022, el *a quo* instó a la apoderada judicial de la parte ejecutada, Elizabeth María Arrieta Arrieta, para que se abstuviera de continuar presentando solicitudes que consideró improcedentes o dilatorias, so pena de hacerse acreedora de las sanciones establecidas por la Ley, sin perjuicio de la respectiva compulsas de copias, conforme al numeral 3º del artículo 78 del Código General del Proceso. (Archivo 15, C- ejecución sentencias)

2. Ante el incumplimiento del requerimiento ordenó compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Antioquia –sic-, para que se constatará si eventualmente había incurrido en falta disciplinaria. (Archivo 36, C- ejecución sentencias)

3. La profesional del derecho procedió a recusar al funcionario con fundamento en la causal 8ª del artículo 141 del Código General del Proceso, pero el recusado no aceptó los hechos por lo que remitió la actuación al Tribunal (Archivos 1 y 2, C- trámite recusación)

II. CONSIDERACIONES

1. Con el propósito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir los litigios en los que aquellos intervienen, el legislador ha previsto que el respectivo juez o magistrado se aparte del conocimiento de la controversia en caso de estructurarse las circunstancias que configuren las causales de recusación e impedimento.

La Sala de Casación Civil en auto AC5349-2022, señaló:

“Reiteradamente ha expuesto la Corte, en doctrina que mantiene vigencia, que las causales de recusación y por extensión de impedimento «(...) *ostentan naturaleza taxativa, restrictiva, limitativa y son de interpretación estricta sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analogía legis o iuris*» (CSJ, AC 19 ene. 2012, rad. 00083; reiterado en AC2400-2017, rad. 2009-00055-01; AC2860-2018, 9 jul., rad. 2015-00162-01, entre otros).

“...

“3. Con el propósito de materializar esta garantía, los jueces o magistrados deben apartarse del conocimiento de los asuntos en que su juicio pueda estar nublado, a través de precisas causales de impedimento y recusación, las cuales salvaguardan *«la posición neutral de quienes ejerce[n] la jurisdicción respecto de los sujetos procesales en un asunto determinado»*¹.

¹ CSJ, STC17889, 7 dic. 2016, rad. n.º 2016-00545-01.

“Al respecto, esta Corporación tiene dicho:

“Los impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, animadversión o amor propio del juzgador... [S]egún las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley... toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad jurídica (AC, 8 ab. 2005, rad. n.º 00142-00, citado AC 18 ag. 2011, rad. n.º 2011-01687).

“Estas causales, por generar que los jueces naturales se separen del conocimiento de los asuntos a su cargo, *«son excepcionales, y, por ende, han de aplicarse e interpretarse de modo restrictivo... sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analogía legis o iuris»*. (CSJ, AC1424, 10 mar. 2016, rad. n.º 2010-00401-01²).

2. El asunto que convoca al Tribunal se resume en un interrogante: ¿El uso de los poderes de ordenación e instrucción que tiene el juez como director del proceso, puede generar causal de recusación?

El hecho a partir del cual se estructura la recusación tiene su génesis en la compulsa de copias dispuesta por el juez de conocimiento para que las autoridades disciplinarias investigaran la falta en que pudo haber incurrido la apoderada de los demandados.

² Criterio expuesto en decisiones AC, 14 jul. 1982; AC, 16 jul. 1982; AC, 26 may. 1992; entre otras.

Como lo señaló el *a quo*, tal proceder no es más que producto del cumplimiento del deber legal que tienen los funcionarios judiciales de denunciar los actos que consideren contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe, que deben observarse en el proceso (artículo 42 ib.). Pero la compulsión de copias es diferente a la denuncia disciplinaria o penal, que es el hecho que previó el legislador como causal de recusación.

3. Debe rememorarse que si bien el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del abogado, señala que sólo podrán intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario, además de que el Ministerio Público puede hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales, el parágrafo del artículo 66 faculta al quejoso para concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva, de tal manera que, ante esas posibilidades y en garantía de la imparcialidad del juzgador, la causal de recusación se torna necesaria.

4. La Sala Civil del Tribunal de Casación en providencia del 20 de febrero de 2014, Radicación 11001- 22-03-000-2013-02248-01, había expresado:

“En efecto, la “causal de recusación” que invocó la entidad querellante fue puntualmente analizada por el juzgador de primer grado encartado, llegando a la conclusión que no había lugar a ello, toda vez que, se itera, la «compulsación de copias y la denuncia penal» son dos estadios diferentes, la primera va encaminada a que se «investigue y compruebe la comisión de un posible hecho punible», mientras que la

segunda, está enfilada a que una vez presentada por la víctima «permiten el ejercicio del tercero denunciante para hacer efectivos los daños y perjuicios». Resolución que fue cuidadosamente examinada por el Ad-quem, negándola, por cuanto la determinación que adoptó el A-quo estaba direccionada a denunciar posibles conductas punibles sucedidas dentro del referido juicio ejecutivo, situación que en nada se asemeja a una denuncia penal, como lo quiere hacer ver el quejoso”.

3. El anterior prolegómeno, igualmente predicable de la compulsación de copias en materia disciplinaria, permite concluir que la causal de recusación formulada por la apoderada de los demandados es infundada.

III. DECISIÓN

Consecuente con lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, RESUELVE**

Primero: Declara infundada la recusación propuesta por la apoderada judicial de la parte ejecutada en este asunto respecto del Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín.

Segundo: Entérese esta decisión a las partes y devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que se continúe con el trámite pertinente.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **979551ff1799f853de73d5406f34ec457a154f000513d6c07d3b371451009689**

Documento generado en 15/08/2023 02:51:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>